

1º.- Con fecha 16 de junio de 2020 tuvo entrada en RENFE-Operadora E.P.E., al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, Ley de Transparencia), una solicitud de que quedó registrada con el número 001-043920. A partir de dicha fecha comenzó a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la citada Ley para su resolución. Posteriormente, con base en el mismo artículo de la meritada Ley, se amplió el plazo de tramitación en un mes adicional el 14 de julio de 2020.

2º.- En virtud de la referida solicitud, se ha requerido acceso a la información en los siguientes términos:

“Quisiera obtener estadísticas de viajeros y toneladas de mercancías transportadas en vagón completo desagregadas por línea en la Región de Murcia:

- *cercanías Murcia-Alicante, Murcia-Águilas,*
- *Media distancia Murcia Zaragoza, Murcia-Barcelona*
- *Larga Distancia Cartagena-Murcia-Madrid*
- *FEVE Cartagena- Los Nietos”*

3º.- Tras analizar el contenido de la solicitud y consultar a los servicios competentes de Renfe Viajeros S.M.E., S.A. (en adelante, Renfe Viajeros) y de Renfe Mercancías, S.M.E., S.A. (en adelante, Renfe Mercancías), se acuerda voluntariamente conceder acceso parcial a la información solicitada, en coherencia con los objetivos de transparencia asumidos en este grupo empresarial, dando traslado junto con la presente Resolución de los datos relativos al número de viajeros en los servicios de Cercanías y Ancho Métrico, por corredores, correspondientes a los periodos 2008 - 2019 y 2013 - 2019, respectivamente.

En relación con la información solicitada, cabe asimismo señalar que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (en adelante, MITMA), en su condición de autoridad competente, según se establece en el Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, es quien se encarga de publicar la información relativa a los servicios declarados como obligación de servicio público (OSP), siendo esta información la única que goza de carácter público. Además, también publica datos agregados sobre el desempeño de las empresas públicas, gozando dicha información, que es accesible a través del siguiente enlace, de elevada repercusión en los medios de comunicación:

- <https://www.mitma.gob.es/ferroviario>

4º.- Más allá de la información facilitada voluntariamente mediante la presente Resolución, y la publicada por el MITMA, con elevado grado de detalle, no procede conceder acceso adicional por los motivos que seguidamente se exponen:

La divulgación de la información solicitada, en concreto, la relativa a las *“toneladas de mercancías transportadas en vagón completo desagregadas por línea en la Región de Murcia”*, y a los servicios identificados como *“Media distancia Murcia Zaragoza, Murcia-Barcelona, y Larga Distancia Cartagena-Murcia-Madrid”*, precisaría llevar a cabo una compleja y específica acción previa de reelaboración, siendo necesario recabar datos de varias empresas y servicios, los cuales ni siquiera están disponibles en un único soporte. En este sentido, el artículo 18.1 c) de la Ley de Transparencia establece que se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.

Teniendo en cuenta que se solicitan datos estadísticos muy específicos sobre la explotación de determinados servicios ferroviarios, de mercancías y de viajeros, resulta procedente la aplicación de la causa de inadmisión prevista en el referido artículo 18.1 c) de la Ley de Transparencia, debiendo tenerse en cuenta, a este respecto, que no se compadece con la normativa de transparencia administrativa que se exija a sociedades mercantiles que destinen costosos recursos para recabar de diferentes fuentes, elaborar y facilitar datos relativos a la explotación de sus servicios que además tienen un considerable valor comercial, por lo que, si son divulgados, podrían ser aprovechados de forma ilegítima en la toma de decisiones por empresas que desarrollan su actividad y compiten en el sector del transporte.

En consecuencia, aparte de la procedencia de la aplicación de la referida causa de inadmisión, al ser la información solicitada susceptible de afectar injustificadamente a los intereses económicos y comerciales de Renfe Viajeros y de Renfe Mercancías, también resulta aplicable, de forma subsidiaria, el límite al derecho de acceso previsto en el artículo 14.1 h) de la meritada Ley de Transparencia, de acuerdo con los siguientes motivos:

Como ha señalado el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el Criterio Interpretativo 1/2019, de 24 de septiembre, citando la Memoria Explicativa publicada por el Consejo de Europa (*“Explanatory Report”*), el límite previsto en el artículo 14.1 h) de la Ley de Transparencia resulta de aplicación cuando el acceso a la información suponga un perjuicio real para los intereses económicos y comerciales de los interesados, siendo uno de los elementos identificativos de dicho límite el hecho de

que la divulgación de determinada información pueda perjudicar la posición de los sujetos implicados en los ámbitos de la competencia o la negociación (“test del daño”).

Por su parte, los tribunales también han señalado que el derecho de acceso, de configuración legal, no es absoluto, por lo que puede ser limitado de manera justificada cuando entra en conflicto con otros intereses protegidos, como los intereses económicos y comerciales, en este caso, tanto de Renfe Viajeros como de Renfe Mercancías (“test del interés público”).

A la vista de la referida doctrina, más allá de la información que publica la Administración General del Estado, a través del MITMA, sobre el desempeño de las sociedades que forman el Grupo Renfe, así como la publicada voluntariamente por este grupo empresarial, cabe concluir que no es conforme a derecho la utilización de la normativa de transparencia administrativa con la finalidad de que empresas que se financian con ingresos de mercado, por el mero hecho de la titularidad pública de sus acciones, tengan que desvelar datos relativos a su actividad y la explotación de sus servicios, y más teniendo en cuenta que el resto de operadores con los que compiten los mantienen reservados.

En relación con el denominado “test del daño”, y atendiendo a las circunstancias del presente caso, no se puede obviar que los servicios que prestan Renfe Viajeros y Renfe Mercancías compiten en la actualidad con otros modos de transporte, en concreto, con vehículos particulares, autocares, aviones y camiones. En consecuencia, si dichas empresas viniesen obligadas a elaborar y hacer públicos datos estadísticos con elevado grado de detalle sobre la explotación de los servicios que prestan, teniendo en cuenta que sus competidores no vienen obligados a publicar datos similares, es evidente que los mismos podrían ser aprovechados ventajosamente en la toma de decisiones por otras empresas que desarrollan su actividad y compiten en el sector del transporte, viéndose de este modo directamente afectadas las reglas de la sana competencia.

Por otro lado, en relación con el denominado “test del interés público”, tampoco se puede obviar que dicho interés se satisface con la información que publica el MITMA en su condición de autoridad competente, que no sólo abarca la exigida por la normativa aplicable, que es la única que goza de carácter público, sino también datos agregados sobre el desempeño de las empresas que forman el Grupo Renfe. Además, a dicha información debe adicionarse la que se facilita voluntariamente mediante la presente Resolución, en coherencia con los elevados objetivos de transparencia asumidos por este grupo empresarial.

Los anteriores motivos, en línea con la doctrina sentada por el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y los tribunales, ponen de manifiesto el carácter

reservado del que goza la información que excede de la publicada por el MITMA y la que voluntariamente se facilita junto con la presente Resolución, y, por lo tanto, la procedencia de la aplicación del límite establecido en el artículo 14.1 h) de la Ley de Transparencia.

5º.- Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de notificación de la presente Resolución. Ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o reclamación que se estime procedente.


Madrid, 17 de agosto de 2020.

EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA

D. Isaías Táboas Suárez

PD: La Directora General Adjunta a la Presidencia

**OVIEDO
CABRILLO
PILAR -**



Firmado digitalmente por OVIEDO
CABRILLO PILAR
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-13298182L,
givenName=PILAR, sn=OVIEDO
CABRILLO, cn=OVIEDO CABRILLO
PILAR
Fecha: 2020.08.20 14:29:16 +02'00'